OPINAR

EDICION 212

«La fuerza de las ideas»
FUNDADO POR EL DR. ENRIQUE TARIGO

EDICIÓN DIGITAL
22 de agosto de 2013
www.opinar.com.uy

El tercer nivel de gobierno en Montevideo UNA LEYENDA URBANA **Por Miguel Manzi**



Uruguay for export

la marca DEL PEPE







Consejo Editorial
Tabaré Viera Duarte, Ariel Moller, César García Acosta.
Redactor Responsable
TCS César GARCÍA ACOSTA, Río Negro 1192/601
Teléfono: 099.686125
Arte: Wilmar Pereira
Registro MEC Nº 2169/2007, Tomo VI, fs. 388,
Registro de Ley de Imprentas. Web: www.opinar.com.uy.
Contactos cgarcia@opinar.com.uy
Gestión Comercial, José L. Ituño jituno@hotmail.com

FFAA en Misiones de Paz
Orgullo nacional

La participación de nuestro país en misiones de paz de Naciones Unidas, se traducen en acciones militares pero tienen un carácter eminentemente de política exterior.
Más allá que al respecto aún perseveran notorias diferencias en el seno del Frente Amplio, claramente desde que éste llegó al gobierno, como en otros temas, felizmente a cambiado su posición, variando a la que hasta ayer criticaban y por la que votaban en contra. Hoy es entonces, casi una «política de estado».
Uruguay en su participación hace un esfuerzo enorme, en proporción a sus recursos humanos y materiales, pero su participación ha redundado en un éxito, reconocido por propios y ajenos. Causa enorme orgullo recibir el reconocimiento y el destaque sobre la acción, la conducta y el profesionalismo de nuestros soldados de las tres armas y de la policía nacional, en la oportunidad de atender a



Tabaré VIERA
Senador de la República. Fue Presidente de Antel, Director de OSE e Intendente de Rivera 2000/05 y 2005/10



distintos jerarcas del organismo internacional que periódicamente nos han visitado. Porque debemos recordar que han participado también policías en misiones de paz, las FF.AA no realizan tareas policiales, para las que no están preparados lógicamente.
Hace pocos días, en compañía de cuatro miembros más de la Comisión de Defensa del Senado, por invitación del Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Pedro Aguerre, tuve la oportunidad de acompañar el relevo de efectivos del Ejército en la República Democrática del Congo. Esta es, junto con la de Haiti (MINUSTAH), una de las misiones más numerosas de las que participamos, mil doscientos efectivos del Ejercito.
La oportunidad fue propicia para tomar contacto directo con la realidad de ese castigado país; para ver «in-situ» el trabajo de nuestros soldados y para darle a la Misión, el apoyo institucional del Poder Legislativo: frente a los efectivos, como apoyo moral y frente a las autoridades de MONUSCO (Misión de ONU de estabilización en Congo) que saben ahora cuanta importancia le damos a nuestros compatriotas.
La realidad social del ex Congo Belga y ex Zaire, es impactante. Es realmente una experiencia fuerte. Es un país con un territorio similar al que ocupa toda Europa occidental y con 75 millones de habitantes, es uno de los países más pobres del planeta y paradójicamente cuenta con una gigantesca riqueza en recursos naturales, los que son uno de los principales motivos del conflicto. Basta decir que el 80 por ciento del coltan , mineral que se utiliza para la fabricación de celulares en el mundo, sale de ese país. Oro, diamantes, cobre y hasta uranio son algunas de las reservas que desde las entrañas del selvático suelo congolés se extrae legal e ilegalmente.
La población vive en extrema pobreza en su gran mayoría conviviendo en la propia selva y en las montañas, sin tener agua potable, energía eléctrica y otras necesidades básicas que integran los indicadores internacionales.
Cultivan segmentos de laderas de cerros y montañas, luego de hacer una enérgica deforestación. Cultivos como el banano, maíz, caña de azúcar, algunos tubérculos y pocas hortalizas son el sustento de la alimentación familiar, algo de pescado seco, que se venden además en las polvorientas calles de los centros poblados, villas y ciudades.
Todo se vende así, en medio de la tierra, el sol y los insectos, incluyendo carne vacuna y aves.
Las calles de las ciudades viven atestadas de gente caminando o empujando un especie de monopatín fabricado artesanalmente en madera, la llaman «toleca». Todos y todas cargan por kilómetros cosas como madera, leña, frutas, etc. Las mujeres de todas las edades cargan además a sus pequeños hijos atados a su espalda, lo que libera sus manos para el trabajo y su cabeza donde soporta el peso de más carga.
El paludismo, la fiebre amarilla, cólera, la poliomielitis, son algunas de las amenazas sanitarias que enfrenta esta pobre gente; el dengue y la disentería hacen estragos en una población que tiene una expectativa de vida de apenas 48 años.
Por si todo esto fuera poco deben soportar la guerra. La existencia de por lo menos ocho grupos armados que representan diferentes intereses, hasta los de países vecinos como Ruanda y Uganda por ejemplo y a diferentes etnias, las que están enfrentadas desde tiempos ancestrales, como los Hutus, que protagonizaron uno de los mayores genocidios de la historia moderna en 1994 en Ruanda, con millones de niños, mujeres y adultos Tutsis asesinados. Todos están operando dentro de territorio congolés.
Por supuesto que estas milicias defienden territorios en los no existe presencia del estado y que contienen invariablemente minas ilegales, cuyo producido es vendido de contrabando al exterior a través de la frontera con países vecinos. Es claro que los compradores finales, son empresas multinacionales de los países industriales que también operan concesiones mineras legales. Naciones como Ruanda que no posee coltan, por ejemplo, es exportador de ese mineral; claramente todos tienen «intereses» en el mantenimiento de algunos grupos guerrilleros, como el más activo en este momento, el M23.
El gigantesco Congo, tiene además el espacio vital que estos pequeños países superpoblados necesitan, otra de las razones del conflicto.
Frecuentemente se producen ataques a poblaciones campesinas con los consecuentes asesinatos, que incluyen mutilaciones atroces, como la ocurrida en la pequeña localidad de Pinga, la que visitamos y donde está establecida una de la bases del Batallón Uruguay IV.
Les aseguro que ver las fotos de estas macabras masacres fue una experiencia brutal, bastante traumática, que se acrecentó por el encuentro con un guerrillero del grupo Mai Mai que ocupa ese territorio, armado y en la puerta misma del Batallón, ostentando su fusil y observando al grupo parlamentario que visitaba el territorio.
Ese ataque hizo que la población civil, incluyendo el grupo de Observadores Internacionales e integrantes de la ONG Médicos sin Fronteras, apostados en el lugar, corrieran a refugiarse a la base uruguaya.
Las amenazas constantes hacen que las proliferas familias de campesinos abandonen sus chozas de adobe, dejando vacías villas enteras y se trasladen, temerosas de las masacres, a refugiarse a los campos de desplazados ubicados en varios puntos del territorio. Estos son gigantescos campos que asientan a decenas de miles de congoleños de todas las edades, los que más que vivir, soportan la vida. No tienen agua, ni luz y claro escasean los alimentos. Los niños con sus caritas tristes, corren cuando llega un extranjero, saludando y pidiendo «money» y «biscuit».
Es cuando nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué algunos tienen tanto y otros tan poco? ¿Por qué se sigue gastando en el mundo tanto dinero en la guerra, mientras existe esta realidad que no es la única?
Todo esos son los ingredientes, que sazonados por una corrupción escandalosa en el poder político y en sus fuerzas armadas, hacen de la RDC un sitio muy parecido al infierno de Dante Alighieri.
Como siempre en medio de los intereses bastardos de los poderosos de la guerra o del vil dinero queda la indefensa población civil.
A esa población civil, de vida primitiva, hacinada en las polvorientas ciudades como Goma, Kisangani o la capital Kinshasa, o aflorando en pequeñas aldeas en lo más profundo de la selva o en las empinadas laderas y cimas de la inmensas montañas que rodean la zona de los Grandes Lagos, es a esos a quienes la humanidad a través de la ONU, tiene el deber de proteger y lo están haciendo con sacrificio y con valentía nuestros soldados.
Las misiones de paz le son útiles a varias partes: a Naciones Unidas, por lo que es su propia razón de ser, la defensa del superior valor de la paz universal y la defensa de los derechos humanos junto a la lucha por el desarrollo humano. Le es útil por supuesto a países como el que acabo de visitar y describir brevemente, no quiero ni pensar que ocurriría sin la existencia de ese gigantesco despliegue de fuerzas internacionales.
Le resulta particularmente positivo a Uruguay, ya que es la mejor posibilidad de entrenar a sus fuerzas armadas en un contexto de guerra pero con una misión especial. Nuestros soldados no están para matar, sino por el contrario para preservar la vida, sin embargo están siempre prestos a entrar en combate, en un escenario de guerra auténtico.
Estas misiones además, son la posibilidad económica de reponer equipamiento militar a costo de ONU, material de última generación que es repuesto con cada rendición de cuentas y luego de la correspondiente inspección.
Por último, vaya que las misiones colaboran legítimamente con la economía de las familias de los sacrificados misioneros y por que no con la de todo el país ya que el dinero bien ganado por nuestros conciudadanos es volcado directamente en nuestro país, a través del gasto en mejoras de sus viviendas y otras inversiones.
Felicitaciones a nuestros combatientes por la paz. Nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes y de ser uruguayos.

Nada natural



José Luis ITUÑO
Periodista. joseluisituno@hotmail.com

Los locos huelguistas
Sin morfina

Con una inusitada firmeza de los trabajadores de la salud, y anuncios de una huelga general a partir del próximo 24 de agosto si no se llega a un acuerdo, se están llevando a cabo la ocupación del Hospital Vilardebó (quizás hoy jueves cuando sale OPINAR ya se desocupó), pero la cosa parece que va en serio al decir del dirigente de COFE Pablo Cabrera, quien aseguró que los trabajadores resistirán la desocupación por parte de la policía y si se tienen que ir, se



corre el riesgo de dejar al nosocomios sin personal.

Por su parte el gobierno decretó el martes la esencialidad de la salud, una especie de vía libre para que los uniformados, basándose en el decreto de marras, hagan pie a tierra en Millán 2515 y fusil en mano, saquen a enfermeros, a médicos, personal de servicios, etc. que hoy están atendiendo el Vilardebó en forma absolutamente normal velando ellos mismos por la esencialidad.

Lo de la intervención policial no creo se dé, pero no lo descarto ya que por más socialismo e izquierda de nuestro gobierno, a la hora de firmar decretos antipáticos contra los trabajadores sin morfina, se relamen.

Bastó ver la carita de la ministra Muñíz haciendo el anuncio, no se le movía un pelo a la comunista sucesora del chileno Venegas, es más parecía hasta disfrutarlo, en realidad la entiendo, el régimen que ella representa (el comunismo) es absolutamente riguroso, en el que una huelga es tomada como una especie de traición al estado y quienes reclaman contra el gobierno van directamente a la cárcel.

Por su parte el «vertientista» ministro Eduardo Brenta sentenciaba «el no cumplimiento del decreto habilita a la institución a sustituirlos e iniciar los sumarios correspondientes».. Tomá pa vos y tu tía Gregoria.

«¿Vos querés jugar al loco huelguista y ocupar hospitales siquiátricos? Vas a tener que esperar que ganen los colorados o los blancos y ahí los propios frentistas (hoy en el gobierno) te van a acompañar para luchar juntos contra los fascistas de los partidos tradicionales rompehuelgas con decretos de esencialidad»

Por suerte, mientras afuera el gobierno amenaza y los trabajadores resisten detrás de las rejas, los internados en el Vilardebó siguen creyéndose, pilotos, marcianos o de vacaciones en Acapulco…



César GARCÍA ACOSTA
Técnico en Comunicación Social.Editor de OPINAR.
cgarcia@opinar.com.uy

Marihuana:
La marca del Pepe

Todo gobierno tiene luces y sombras. Y todo gobierno, en esencia, se caracteriza a la luz de la historia por aspectos de su gestión muy marcados por la impronta de cada gobernante. Julio Mª Sanguinetti caracterizó su primera administración por «el cambio en paz», desafiando todo pronóstico de fracaso al consolidar una democracia republicana después de trece años de dictadura; en su segundo gobierno logró la reducción al mínimo histórico de la moralidad infantil y transformó el régimen de seguridad social en un espacio de certezas dejando atrás años donde por cada pasivo debían aportar cuatro activos. Luis Alberto Lacalle introdujo al país en el Mercosur y Jorge Batlle logró que una crisis bancaria internacional no dejara al Uruguay en default. Tabaré Vázquez intentó innovar en gestión pública, pero quizá donde mejor incidió fue en la introducción del PC en la escolaridad. ¿Y a Mujica qué lo caracterizará? Seguramente, conforme lo indica la realidad, le dará a Uruguay la marca de la Marihuana.

En este contexto el secretario general de la Junta Nacional de Drogas uruguayo, Julio Calzada, informó que no se brindará más de 30 licencias en total a las empresas que quieran plantar marihuana de manera legal, una vez que se apruebe el proyecto de ley que regulariza su producción y comercialización.

Según precisó, el Estado otorgará las semillas a las empresas, que plantarán en invernáculos y luego le venderán la marihuana, todas a igual precio, a otra empresa que estará encargada del acopio y la distribución a las farmacias que tengan licencia para vender.

El objetivo es que la producción sea acorde al volumen estimado del mercado. Asimismo, señaló que «están las condiciones tecnológicas que permiten la trazabilidad de las sustancias» por lo cual «se podrá hacer un seguimiento para controlar que quienes compren no vendan a terceros».

«Se van a establecer criterios que den cuenta de las necesidades de seguridad que tiene un proyecto de estas características; hay seguridad biológica porque se tiene que plantar en invernáculos, y hay una seguridad física para evitar desvíos», explicó Calzada.

Calzada agregó que se está trabajando con los ministerios de Economía, Interior, Ganadería, Salud Pública e Industria y señaló: »El que quiera plantar tiene que darnos la seguridad de que va a tener el cultivo controlado».

Por último, sostuvo que la marihuana se venderá a un precio «que esté en el rango de venta del mercado negro». Se venderá una cantidad máxima de 40 gramos por mes.

El proyecto para legalizar la marihuana ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Le resta ahora ser aprobada en el Senado. De ser necesario, el presidente José Mujica dijo que está dispuesto a convocar un referendo para ratificar o no la reglamentación de la ley.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que regula la comercialización y el consumo de marihuana, con 50 votos a favor, y ya está todo listo para que comience el tratamiento en el Senado.

La iniciativa estuvo a punto de no ser aprobada, ya que al interior del Frente Amplio, el legislador Darío Pérez tenía sus dudas, aunque finalmente apoyó al bloque.

El mayor desafío para el proyecto, impulsado por el gobierno de José Mujica, era en la Cámara baja, que pareció no obedecer a la regla general de que el Senado suele ser más conservador en este tipo de iniciativas.

Se estima que el debate en la Cámara alta será mucho más sencillo que en Diputados. Sin embargo, en el Frente Amplio hay 15 senadores, además del vicepresidente Danilo Astori, misma cantidad que posee la oposición.

Un díscolo, como Pérez, podría ser letal para el proyecto. Pero, de todas formas, el Frente Amplio especula con que el tratamiento y aprobación de la ley en el recinto sea en el mes de octubre.

Ya remitido al Senado, el proyecto será estudiado por la Comisión de Salud luego de que se aprueben los proyectos de reproducción asistida y la internación compulsiva de los adictos a la pasta base.

Más allá de procedimientos y salvaguardas a la adicción, Uruguay pasará a la historia durante este período, en tiempos del presidente Mujica, como un país marihuanero.

El partido comunista al Frente Amplio

«No hay parlamentarios de primera y otros de segunda»

Por Mariano TUCCI

Con paros en todas partes, acusaciones y reclamos a través de los medios de comunicación, amenazas de esencialidad en la salud, y de suspensión de vacaciones para recuperar las clases perdidas, el Frente Amplio se apresta a votar la rendición de cuentas en el Senado de la República. Desde el gremio de la pesca hasta la Fenapes, el movimiento sindical tomo las calles para reclamarle al gobierno que se cumpla lo que se les prometió en campaña electoral.

Al decir del diputado José Ami, el Frente Amplio «esta probando su propio veneno»

La tradicional polémica por la rendición de cuentas comenzó a reflejar las diferencias internas en la fuerza política de gobierno ya que uno de sus disputados se quejó por la poca participación que los sectores mayoritarios le dieron al partido Comunista en el marco de las negociaciones efectuadas para definir las prioridades para el final del quinquenio.

El foco de la discusión estuvo en el aumento prometido para la ANEP, insuficiente para algunos y adecuado para otros. En ese marco, cuando se inició el análisis del incremento del 3% **el diputado comunista Hugo Dávila**, consideró que ese porcentaje «debió ser un piso y no el techo» del aumento.

En ese marco y como preámbulo de la discusión, Dávila tildó de inconvenientes las declaraciones del presidente José Mujica cuando señaló públicamente que los maestros trabajan pocas horas. «Como dicen en mis pagos, ya está todo el pescado vendido a esta altura del campeonato. Se plantearon alternativas como aumentar el IRAE, o utilizar las divisas, pero no logramos convencer a nuestros compañeros. Hoy se sigue reclamando más recursos para la educación», manifestó el mandatario al referirse a los recursos destinados a la educación.

El legislador explicó en el transcurso de su ponencia que «a los legisladores del interior nos toca bailar con la más fea por tener que vernos todos los días con los vecinos» y reconoció que tiene el anhelo que el artículo pueda ser mejorado en el Senado.

Manifiestamente molesto Hugo Dávila dijo en sala; «los docentes del departamento de Artigas, que tienen que levantar se a las 4 de la mañana, para tomar un ómnibus a las 5 y llegar hasta localidades de interior del mismo departamento para dar clases a las 8 culminando a las 12. Y tomar nuevamente un ómnibus y llegar a la casa a las 16. Además del trabajo tienen horas para llegar al trabajo y están lejos de su familia prácticamente doce horas.

La esperanza que tenemos es que este artículo pueda ser mejorado en el senado de la República, lo que si personalmente me hubiera gustado que si esa alternativa se diera se hubiese contemplado a todos los integrantes de la fuerza política, porque en definitiva pensamos que no hay parlamentarios de primera y de segunda.

Somos cocientes que en el Senado están todos los cabeza de lista y como estamos muy próximos a las elecciones, tal vez se pretenda mezquinamente hacer algún planteo pensando en las elecciones. Queremos que esto no sea así y nos hubiese gustado que en definitiva todos hubiéramos sido integrados a esa discusión».

Dávila no perdió la oportunidad de pasar facturas al gobierno por desatender los reclamos de su partido político;»en toda la discusión acompañamos la propuesta del compañero Doreen Ibarra de reasignar recursos equivalentes al 1 %, lo que hubiera permitido un 4 % para la educación, propuesta que no fue acompañada por nuestra bancada».

El senador Alberto Couriel, uno de los parlamentarios del oficialismo encargado de analizar en profundidad los números del gobierno, rechazó los conceptos de su colega y dijo que la fuerza política abrió el debate de manera permanente al diseñar la rendición de cuentas y aclaró que en esas instancias el partido Comunista estuvo siempre presente. «Al gasto público que manda el Poder Ejecutivo, el parlamento no lo puede aumentar salvo, en aquellas instituciones que puedan mandar su propio presupuesto. Es decir, las instituciones del artículo 220, como el poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Anep, la Universidad de la República, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y así sucesivamente.

De manera que seguramente se va a retomar un poco la discusión que hubo en diputados…

Usted cree que podría haber alguna modificación a partir de lo que dijo el diputado del partido Comunista Hugo Dávila, quien expresó que a su partido se lo dejó un poco de lado en la discusión e hizo un llamado a la apertura en el debate…

Nadie quedó afuera de la discusión. Absolutamente nadie. Yo participe en algunas reuniones de senadores y diputados y ahí estaban los representantes de la 1001, los representantes del partido Comunista, lo que pasa es que acá hay una cosa que no es un hecho menor.

Para que las democracias sean fuertes los partidos tienen que ser fuertes y para que los partidos sean fuertes tiene que existir algo que se llama disciplina partidaria. Si no hay disciplina partidaria los partidos se debilitan. Y el Frente Amplio tiene una característica que es una característica de la izquierda uruguaya y que es difícil verla en otros países; la unidad de acción y esto hay que asegurarlo.



Dávila tildó de inconvenientes las declaraciones del presidente José Mujica cuando señaló públicamente que los maestros trabajan pocas horas. «Como dicen en mis pagos, ya está todo el pescado vendido a esta altura del campeonato. Se plantearon alternativas como aumentar el IRAE, o utilizar las divisas, pero no logramos convencer a nuestros compañeros. Hoy se sigue reclamando más recursos para la educación», manifestó el mandatario al referirse a los recursos destinados a la educación.



Julio María SANGUINETTI
Periodista. Abogado. Presidente de Uruguay 1985/1990 y 1995/2000. FUENTE: diario EL PAIS

El momento de Paraguay

Con una optimista perspectiva de crecimiento económico para este año (un 12,5%, según la Cepal; un 13%, según el Banco Central), Paraguay se prepara para estrenar un nuevo gobierno la semana que viene.

Retorna el viejo Partido Colorado (oficialmente, «Alianza Nacional Republicana»), que gobernó 60 años antes de caer, por vez primera, en 2008, frente a una coalición formada por su histórico rival, el Partido Liberal, y un candidato extrapartidario, el obispo Fernando Lugo, quien no terminó su mandato al ser depuesto por un juicio político en que el Parlamento se pronunció en su contra por abrumadora mayoría.

Los gobiernos del Mercosur (y luego la Unasur) reaccionaron apresuradamente ante el episodio y suspendieron a Paraguay de esos organismos. Calificaron de «golpe de Estado» lo que había sido un procedimiento constitucional, llevado a cabo por los poderes legítimos del Estado (Legislativo y Judicial). Predominaron la camaradería con el presidente «amigo», la simpatía por su presunto progresismo y la voluntad de hacer ingresar en el Mercosur a Venezuela por la ventana, eludiendo la negativa paraguaya. El atropello fue tan grosero que el propio presidente uruguayo, José Mujica, votante de todo, lo confesó paladinamente: «Lo político primó sobre lo jurídico».

La elección aportó un juicio inequívoco: los dos partidos que votaron la destitución de Lugo obtuvieron más del 90% de los votos, y los opuestos, todos sumados, no llegaron al 10%. El propio ex presidente resultó electo senador con un 9% de votos, adquiriendo así un estatus que en lo personal le es valioso, pero que en lo político desnuda la disminución de su respeto, luego de la nube de hijos naturales que le aparecieron como impensado fruto de sus tiempos de sacerdocio.

Desgraciadamente, el Mercosur sigue en su errática línea de conducción y, al tiempo que levanta la suspensión de Paraguay, confirma la presidencia pro témpore de Venezuela, hiriendo así -innecesariamente- a quien fue mal sancionado y no puede aceptar, lógicamente, la presidencia de un país cuya integración ni siquiera aprobó (y cuya membresía es de muy dudosa validez).

El retorno del coloradismo es juzgado por algunos como una deriva hacia el pasado autoritario de esa colectividad, que acompañó los 35 años de la tiranía de Stroessner. La historia reciente nos dice lo contrario. Ante todo, porque el fin de la dictadura lo provocó el mismo Partido Colorado, desde un ejército comandado por el general Andrés Rodríguez, quien destronó al anciano dictador, fue revalidado por el voto popular y condujo, luego, una abierta reinstitucionalización democrática.



El Partido Colorado que retorna al poder, entonces, es otro. Ha pasado por el llano y se ha recompuesto en él, preservando una organización que ha sido revalidada ahora sin el apoyo clientelístico de la administración. A su frente queda ahora un presidente que no tiene larga experiencia política ni tradición partidaria, pero que tampoco arrastra los pesados lastres del pasado. Sus primeros pasos han sido auspiciosos, pues ha consolidado una fuerte mayoría parlamentaria.

Horacio Cartes recibe un país que en los últimos años ha mostrado notables indicadores de crecimiento y vive un vigoroso tiempo de cambio. El año pasado fue negativo por los efectos de la sequía y de un brote de aftosa que afectó su exportación de carne, pero la emergencia ha pasado y se espera terminar el año igualando, o superando, el récord de 2010, en que un 13% de expansión del PBI le proyectó como excepcional a nivel mundial. La revolución sojera y el desarrollo ganadero lideran esta expansión, sustentada además en una fuerte reserva financiera y un clima de inversión creciente, que mira hacia la construcción, el turismo y la agroindustria. Digamos, simplemente, que hoy Paraguay ha superado a la Argentina en exportación de carne. Por estas razones, tanto en Brasil como en la Argentina y Uruguay crece el interés por invertir allí, retroalimentando esa expansión en curso.

Todo indica que los precios internacionales que han liderado el crecimiento sudamericano tendrán un aflojamiento, pero todavía con un nivel más que suficiente para sustentar un proceso de modernización como el que Paraguay requiere. Hay un ambiente internacional francamente optimista. Se trata ahora de que el nuevo gobierno preserve el clima de estabilidad, maneje su mayoría parlamentaria con sabiduría, trate de disminuir esas crispaciones tan propias de una política que aún arrastra años de enfrentamientos y no recaiga en el clientelismo y el caudillismo personalista. La situación pondrá a prueba el pragmatismo presidencial de exitoso empresario privado, que tendrá que manejarse en los vericuetos de una política compleja, con sus tiempos y exigencias. Su desafío intransferible es impedir que la política dañe la economía.

Paraguay arrastra una endémica pobreza. Con un 49%, supera largamente el promedio de América latina (28,87% de la población, según la Cepal). La habitual tentación es explotarla con un Estado prebendario, que suele dar alguna respuesta electoral rápida, pero compromete el futuro. El Estado no debe comprar conciencias ni atar al ciudadano a la dádiva. El reclamo público siempre exigirá resultados milagrosos. Se trata de racionalizarlo con avances realistas, acompasados al crecimiento económico.

La oportunidad es inédita. El viejo aislamiento paraguayo ha quedado en los libros. El nuevo presidente se enfrenta a una cita con la historia. Todo está dado, entonces, para un gran salto.

■

Nada menos que una vergüenza nacional

Ope PASQUET
Abogado. Senador. Ex Ministro de Relaciones Exteriores



En El Observador del jueves 15 leí una información que me parece más que grave; gravísima. Si ordenamos a los países de América del Sur (excluidas las Guayanas) en función del porcentaje de población con educación secundaria completa, Uruguay es, con su 36%, el último de la tabla. Nos superan todos los demás, es decir Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

La información está desagregada por quintiles de ingresos. También somos los peores, quintil por quintil. Esto quiere decir, por ejemplo, que es mayor el porcentaje de los bolivianos del sector más pobre de la sociedad boliviana que logran terminar sus estudios secundarios (46,6%), que el porcentaje de uruguayos de ese primer quintil (el más pobre) que alcanza tal resultado (20,8%). Si vamos a la otra punta, es decir al quintil de mayores ingresos, también perdemos: 86,3% en Bolivia, 60,2% en Uruguay.

Si nos comparamos con Chile, encontramos que es mayor el porcentaje de los chilenos más pobres que terminan secundaria (65,1%), que el de los uruguayos más ricos que logran lo mismo (60,2%). O sea: el peor resultado de los chilenos, supera a nuestro mejor resultado.

La cuestión ya no es que nos ganan Finlandia o Singapur, como en las pruebas PISA. Reitero: perdemos en la comparación con los otros nueve países de América del Sur arriba mencionados, tanto en el porcentaje global como quintil por quintil.

¿De dónde salen estos datos dolorosos, amargos, desoladores? La edición en papel del Observador no lo dice, pero en El Observador digital encontramos una columna del periodista Gabriel Pereyra que indica la fuente: el proyecto Graduate XXI. Hecha la consulta en Google, resulta que Graduate XXI es una entidad financiada principalmente por el BID (también, en menor medida, por la República de Corea), dedicada a combatir la deserción de la enseñanza secundaria en América Latina.

No parece necesario repasar ahora las muchas razones por las cuales es vital, para un país como Uruguay, que su población se destaque en el mundo por la calidad de su educación. Somos muy pocos como para darnos el lujo de ser, además, ignorantes. Necesitamos ciudadanos ilustrados en todas las clases sociales para que las instituciones democráticas funcionen bien, funcionarios calificados para que el aparato estatal pueda hacer bien lo mucho que de él esperamos que haga, empresarios y trabajadores capaces para que la economía crezca y sea competitiva a nivel internacional, públicos educados para que la vida cultural tenga volumen y altura. Todo esto es tan obvio que casi da vergüenza decirlo o escribirlo; pero al final uno ya no sabe qué es lo obvio, ni qué dejó de serlo.

Un estudio reciente de UNICEF señalaba que la causa principal del abandono de los estudios secundarios en Uruguay, es la falta de interés de los alumnos por lo que se les enseña. Si esto es así, ¿no valdrá la pena averiguar qué están enseñando a sus estudiantes esos países vecinos y tan parecidos a nosotros que, sin embargo, obtienen resultados tan superiores a los nuestros? No creo que haya dos pueblos americanos tan parecidos entre sí como argentinos y uruguayos. Sin embargo, en el asunto que estamos considerando –porcentaje de la población con secundaria completa- Argentina nos lleva unos veinte puntos de ventaja en casi todos los quintiles (en el cuarto quintil son casi treinta puntos). Examinar sistemáticamente los programas de estudios secundarios de los países de América del Sur y compararlos con los nuestros me parece necesario y factible.

En una sociedad fragmentada como lo es hoy la nuestra –y como lo son también tantas otras-, los intereses de los jóvenes no son los mismos. Parece claro que hay conocimientos básicos que todos deben adquirir, independientemente del lugar en el que vivan o de la inclinación vocacional que puedan tener. Pero más allá de ese terreno común a todos, es preciso que cada centro educativo disponga de un margen de autonomía dentro del cual pueda moverse para responder a las particularidades y exigencias de su entorno. Hay que capturar el interés de los estudiantes, para evitar que deserten, y para lograrlo es preciso que cada centro educativo pueda adaptarse a sus propias circunstancias.



Sé que no digo nada nuevo cuando hablo de estudiar lo que hacen los vecinos o darles más autonomía a los liceos. No importa. Lo que noquiero es entrar a la reyerta política menor, hurgando en busca de responsabilidades y culpables. Busquemos soluciones, buenas simplemente si no podemos encontrar las mejores, parciales si no logramos hallar una solución global. Pero hagamos algo, todos, pese a la campaña electoral en ciernes y gane quien gane la próxima elección, porque lo que está pasando con la educación de nuestros jóvenes es al mismo tiempo un desastre y una vergüenza nacional.

■



Carlos Alberto MONTANER
Escritor y Periodista Cubano
FUENTE: el www.blogdemontaner.com

Árabes buenos y malos

Centenares de muertos y miles de heridos es una carnicería excesiva. Obama le ha pedido a la junta militar egipcia el ejercicio de dos virtudes ajenas a la cultura y la tradición del país: tolerancia y moderación. Pese a que el presidente estadounidense también dijo que su país no podía ni quería decirles a los egipcios cómo debían conducir sus asuntos internos, eso, precisamente, fue lo que hizo. Solicitó elecciones libres y un poder limitado por la ley.

Francamente, me parece muy difícil que lo complazcan.

Estados Unidos, no cabe duda, ha sido la nación más exitosa del planeta a lo largo del siglo XX y en lo que va de nuestra centuria. El experimento republicano de las trece colonias, que a fines del siglo XVIII parecía condenado a fracasar, dio lugar a un país asombrosamente rico y fuerte que hoy es la única superpotencia de la tierra. Sin embargo, ese fenómeno, aunque es voluntariamente imitable, no se puede inducir desde el exterior.

Al contrario de lo que sucedía en el país de Washington y Jefferson, el núcleo de tensión que prevalece entre los árabes islamistas no consiste en limitar la autoridad del gobierno, proteger los derechos individuales y crear unas relaciones de poder basadas en la meritocracia y la igualdad ante la ley (para lo cual son fundamentales la tolerancia y la moderación), como estableció Estados Unidos cuando se separó de Inglaterra.

El conflicto en el mundillo árabe es de otra naturaleza: dirimir por la fuerza el mortal enfrentamiento entre dictaduras militares seculares, generalmente antioccidentales, que se consideran progresistas, aunque progresen poco, y los partidarios de un modelo teocrático opresivo que defienden la creación de un Estado islámico regido por la sharía o ley fundada en el Corán, cuyo principal objetivo, desgraciadamente, es destruir al Estado de Israel y luchar contra los infieles, ya sean cristianos coptos o libaneses maronitas.

Es, en fin, una pelea a cuchillo entre militares laicos, broncos, feroces y autoritarios, provistos de ideas políticas nacionalistas teñidas por supersticiones socialistas, y religiosos imbuidos de creencias fantásticas comprometidos con Alá para someter al género humano a la autoridad del Corán.

Para el resto del mundo, por lo tanto, generalmente no se trata de escoger entre demócratas liberales y fundamentalistas religiosos (eso sería demasiado fácil), sino entre militares despóticos, usualmente corruptos y asesinos, y fundamentalistas religiosos, casi siempre agresivos y peligrosos, lo que suele conducirlos a mataderos en los que ellos son víctimas o victimarios en nombre de la verdad definitiva revelada a Mahoma en el desierto.

En Washington no se entiende esta fatal disyuntiva. Muchos políticos y funcionarios padecen de etnocentrismo. Piensan que todos los países pueden y deben crear un modelo de estado presidido por la



libertad individual, servido por un gobierno controlado por la constitución y limitado por los equilibrios y contrapesos.

En realidad, esa fórmula es extraordinaria, pero, para que funcione, previamente tiene que existir una sociedad (o al menos una élite dirigente) dispuesta a practicar la tolerancia, definida como la decisión de convivir pacíficamente con todo aquello que no nos gusta, a colocarse bajo la autoridad de la ley, a admitir que nuestras verdades y convicciones no son únicas e infalibles, y a ejercitar la cordialidad cívica con un adversario al que no hay que amar, pero que merece nuestro respeto.

En las sociedades árabes esos factores son excepcionales. Hay individuos que poseen ese perfil, y hasta se agrupan en pequeñas instituciones que proclaman estas reglas de juego. He conocido liberales marroquíes, sirios, libaneses y tunecinos, lo que me hace pensar que también debe haberlos en Egipto y en el resto de la geografía árabe, pero carecen de peso específico para hacer girar a sus países en la dirección que el 4 de julio de 1776 los norteamericanos adoptaron en Filadelfia.

Mientras no ocurra ese cambio de valores, es una ingenuidad tratar de escoger entre gobernantes árabes «buenos» y «malos». La alternativa es mucho más agónica.



Consuelo PEREZ
Edila por Montevideo

Apropiación indebida

El Programa de Realojos, un instrumento que mediante acuerdos entre la Intendencia de Montevideo y el MVOTMA propicia la reubicación de familias con bajos recursos que se encuentran en suelos fiscales no aptos para vivienda y que cumplen con la condición de contaminados e inundables, se transformó en un mecanismo inconsulto y autoritario.

La Manchega, Joanicó, Isla de Gaspar, Cañada Matilde y Duranas son los programas en los que la I.M. se encuentra trabajando, o comenzará a hacerlo.

En Pedro Trápani y Bayona se instalarán quince familias correspondientes al realojo Paso de las Duranas.

La zona cuenta con el espacio cultural «La Criolla- Paso de las Duranas», y disfruta de equipamientos comunes al barrio tales como el escenario Pablo Estramín, canchas, juegos para niños y un equipamiento urbano conseguido y mantenido con el aporte y cuidado continuo de los vecinos de la zona.

La I.M. se propone afectar tres padrones, con un área total de unos mil metros cuadrados par reinstalar a las familias, en viviendas que les serán entregadas a las mismas, contiguos a este centro.

Los vecinos de la zona se oponen firmemente a esta decisión, y lo han hecho saber a las autoridades, manifestándose en una multitudinaria asamblea realizada a tales efectos.

Argumentan que el cambio físico contundente desvalorizará al entorno, al espacio cultural mencionado, y agregará elementos contraproducentes relacionados con la seguridad y con la propia presencia de las nuevas viviendas.

Es que en experiencias similares –asentamiento de Candelaria- las viviendas se entregaron sin terminar en lo concerniente a sus cerramientos exteriores. Fácil es imaginarse el estado general del conjunto, en el que sus ocupantes, más allá de no pagar nada por lo que les fue entregado, han incidido negativamente en ese aspecto, pues no existe ni el orden ni la prolijidad ni el interés por el entorno en la «terminación» de las unidades .

Los vecinos se sienten atropellados por la Comuna y por el Municipio C, y fueron en su oportunidad muy duros con la alcaldesa y con la directora Eleonora Bianchi, responsable del Departamento de Acondicionamiento Urbano de la I.M.

El sentimiento de muchas trabajadoras domésticas de la zona, que trabajan en más de un lugar, que con sacrificio han construido su casa y su entorno, y que de buenas a primeras ven deteriorarse el mismo por soluciones de asistencialismo que no exigen nada a cambio, fue de indignación, y fueron muy aplaudidas en la Asamblea mencionada.

Los hábitos sociales de las familias a insertarse son muy distintos a los de los trabajadores de la zona, pues provienen de asentamientos donde el reciclaje de basura es una de las características de su actividad.

Éste ha sido el argumento esgrimido por las autoridades y sus «seguidores conceptuales», atribuyendo a los vecinos, legítimos dueños de su entorno, actitudes individualistas y egoístas, en una actitud injusta, y alejada de la realidad.

Si bien es indudable el contraste de la condición social y las costumbres de los futuros habitantes con los actuales, no es éste el principal problema en esta infeliz gestión:

El hecho principal es que la I.M. y toda su maquinaria burocrática nunca se han interesado en la opinión de los vecinos. Nunca se han reunido con ellos para interiorizarse de las actividades del barrio, de su forma de vida.

Nunca les han importado sus legítimos derechos, por el simple hecho de que los ven como contribuyentes –un número- y no como personas o como ciudadanos que además, pagan sus impuestos.

Si bien se pretende negociar con las autoridades por intermedio de una comisión barrial de vecinos, es inminente y descartado que no habrá marcha atrás.

El autoritarismo, prepotencia e ignorancia de los derechos ciudadanos se ha transformado en una constante en la relación de la comuna con la sometida población de Montevideo.

No sólo por el incumplimiento durante décadas con la provisión de servicios por los que pagamos puntualmente, sino por este tipo de actitudes «colonizadoras» que se corresponden con las más oscuras decisiones tomadas por sistemas que, de democráticos, no tienen nada.

Horacio Cartes

«Sabiduría, prudencia, y justicia»

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Director de Orquesta



El multimillonario empresario Horacio Cartes asumió la Presidencia de Paraguay, declarando -luego de ser investido-: «Invoco a Dios, para que me de sabiduría, prudencia, y justicia, para cumplir mis deberes de servir al noble pueblo paraguayo». El nuevo mandatario se hace cargo del gobierno del país hermano en momentos sumamente complejos en cuanto a la interrelación latinoamericana, en especial frente al Mercosur, como asimismo dentro de una ubicación comprometida en varios aspectos, en particular siendo representante del tradicional Partido Colorado -sector político que apoyara la dictadura de Alfredo Stroesner-, en segundo término tras conformar un gabinete con técnicos de reconocida trayectoria, extraídos de empresas y multinacionales -algunas, propiedad de Cartes -, dejando de lado, en parte, a muchos políticos, creando malestar en la cúpula del partido, que -es justo señalar- modificara sus estatutos para habilitarlo como candidato, puesto que, al afiliarse en 2009 no contaba con la antiguedad necesaria.

Con un cuarenta y seis por ciento de los votos en los últimos comicios -luego que el presidente de izquierda Fernando Lugo fuera destituído por el Parlamento debido a su «deficiente desarrollo de funciones»- Horacio Cartes triunfa -y se lleva la «etiqueta» de «hombre de derecha» por la majadería y tontería «progresista»-, iniciando de esta manera su mandato con una posición diametralmente opuesta a la actual ideología política que profesan casi todos los gobiernos del continente.

Aparentemente, Cartes pretendería -en mi opinión- modificar algunas estructuras y conceptos -muchos de ellos enquistados-, delineando al menos una «intención» de cierto distanciamiento, por no decir una desvinculación del pasado del Partido Colorado, y abordar una especie de liderazgo a nivel nacional.

La presidencia de Horacio Cartes pone ahora en juego una situación delicada para los gobiernos integrantes del Mercosur, porque se estaría superando «la crisis diplomática», a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo, acontecimiento que llevara, a Paraguay, a ser suspendido por el mencionado bloque.

Por supuesto, siempre, se crea un motivo para continuar con el conflicto -más si va dirigido a un derechista-, y ahora la administración de Venezuela está ofendida -al que debemos agregar la «molestia» de otros de izquierda, especialmente Cristina Fernández, Mujica, y en particular el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que por solidaridad no envió representantes -, debido a no ser cursada la invitación al



Sr. Nicolás Maduro para el acto de asunción de Cartes.

La realidad -como es de conocimiento- nos recuerda el castigo a Paraguay al dejarlo de lado, y para «colocar la cereza en el postre» se ingresó a Venezuela al bloque, convirtiéndolo de esta manera en miembro pleno, pero a través de irregularidades jurídicas si tomamos en cuenta las normas legales establecidas para la admisión. Como si fuera poco, en la cumbre de Montevideo, Nicolás Maduro se hace cargo de la presidencia pro témpore, cuando Paraguay había reclamado ocupar la titularidad.

Por otra parte -¡que comedia!- Maduro se «enfada» por no ser invitado, pero debemos señalar que, el mencionado gobernante no recibió el «curso protocolar» porque retiró su representación diplomática en Asunción. Por tanto, si existe una ruptura en las interrelaciones, es lógico que Paraguay tomara la postura de referencia.

Horaco Cartes ha manifestado su «intención» de establecer buena correspondencia con el Mercosur, pero, en mi opinión, el presidente paraguayo será muy cauto en lo que respecta al tema, porque debemos tener presente sus manifestaciones -luego de la cumbre de Montevideo- de no volver al bloque.

A decir verdad, si bien los presidentes de Uruguay, Argentina, y Brasil, han manifestado apoyo a Cartes para el retorno de Paraguay al bloque, el «deslumbramiento» del «triunvirato», referente a Nicolás Maduro -motivado por la afinidad de ideas políticas-, no es un acontecimiento prometedor para la realidad paraguaya, porque Cartes, está muy lejos de esa postura, y creo que se «moverá» dentro de un plano de «acercamiento» bilateral con los representantes del Mercosur, tratando de concretar acuerdos de manera personal, pero estando atento a los comportamientos de sus colegas.

El nuevo Ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, manifestó que la presencia de Dilma Rousseff, Cristina Fernández, y José Mujica -en la ceremonia de instalación del nuevo presidente-, «es una muestra de intención de normalizar las cosas lo antes posible».

Una declaración que, en lo personal, debo tomarla como puramente diplomática y expresión de «buenas costumbres», porque si lo analizamos dentro de una observación «real», me deja perplejo -por la ingenuidad- puesto que Brasil se ha «preocupado» en buena medida que, Paraguay, se demore en ingresar como miembro observador a la Alianza del Pacífico.

Horacio Cartes -que señalara que debe primar siempre lo jurídico sobre lo político, y que por supuesto no le ha gustado a «don Pepe», ni a «doña Lucía» -, no solo queda distanciado del presidente uruguayo, y de Nicolás Maduro, sino además del mandatario ecuatoriano -por su solidaridad con Venezuela-, del gobierno de Brasil -por lo expresado-, como asimismo de los países integrantes de la Alianza Bolivariana, como Bolivia (miembro pleno del Mercosur), Nicaragua, y Cuba, cuyo presidente Raúl Castro ha renovado su «alianza estratégica» -originada por Fidel Castro, y Hugo Chávez-, acontecimiento que, en lo comercial, permite a Venezuela verder alrededor de ciento veinte mil barriles de petróleo por día, a la isla.

La situación, y posición del presidente paraguayo, es sumamente delicada a nivel del continente. Sin lugar a dudas deberá afrontar conflictos, y en cierta medida, aislamiento, como asimismo limitaciones de potencial por parte de los integrantes del bloque.

■



Jorge BATLLE
Abogado. Periodista. Presidente de la República (2000-2005) Fuente: facebook

Le tienen miedo al pueblo

Con esa frase el Senador Amorín descalificó la conducta del gobierno cuando el Intendente de Canelones suspendió los homenajes a Artigas y cuando más tarde, el 18 de Julio, día de la Jura de la Constitución, el gobierno de la República y su Presidente, el ex guerrillero tupamaro, José Mujica, marginó al Pueblo de los actos, se aisló de los que protestaban en un corral de vallas que él mismo armó y confirmó cuan lejos están del Pueblo. Las palabras del Senador Amorín fueron dichas el sábado pasado en el Club Platense en ocasión de un hermoso acto de su proclamación como Pre candidato del Partido Colorado Batllista a las elecciones internas.

Con la participación de delegados de todos los departamentos de la República, un numeroso grupo de jóvenes dirigentes y con las palabras de Ikmal Amir se dio inicio a una reunión que estuvo presidida por las figuras de José Pedro Varela y José Batlle y Ordoñez.

La seguridad, la educación, la salud, el IRPF, y sus necesaria derogación, la apertura al mundo para poder crecer, las oportunidades en lugar de las dádivas que hacen presos a aquellos que reciben pescado sin enseñárseles a pescar, constituyeron los ejes del discurso del candidato.

«BATLLISTA DE LEY» es su lema, y es el trillo que este grupo de mujeres y hombres se comprometen a seguir.

Prudencio Vázquez y Vega, que murió en Minas en brazos de Batlle y Ordoñez, fue el inspirador de toda una generación de jóvenes que se batió en El Quebracho contra la dictadura de Santos, y que gobernó el país hasta 1929. En aquel grupo universitario participaron todas las figuras más distinguidas de la sociedad uruguaya. Cinco futuros Presidentes estuvieron en El Quebracho: Batlle, Williman, Campistegui, Serrato, Viera. Zorrilla de San Martín fue Secretario del Comité que presidiera el Gral. Lorenzo Batlle. Los hombres más importantes del Partido Nacional también figuraron como líderes principales de ese gran movimiento. Interrogado por el gran historiador Juan Pivel Devoto, Campistegui le dijo: «la nuestra era una revolución dentro de otra», los hechos le dieron la razón. Ese grupo humano con Colorados y Blancos gobernaron al país sin pausa desde el Consejo de Cuestas hasta la muerte el 20 de octubre de 1929 de José Batlle y Ordoñez.

Entre todos ellos forjaron la identidad fundamental de esta Nación. Unos en el gobierno, otros en la oposición, oposición fuerte pero intelectualmente válida.

En su momento Prudencio Vázquez y Vega que integraba el Partido Constitucionalista lo invitó al joven Batlle y Ordoñez a que participara de ese movimiento político. Él, colorado como su padre, sintió que las masas del Partido Colorado le iban a permitir desde el gobierno de la República, apoyado por tanta gente tan valiosa, modernizar al país. De la economía de sus gobiernos se ocupó fundamentalmente el Ing. José Serrato y otros hombres grandes que lo acompañaron. Batlle y Ordoñez se ocupó de la gente, respetándola, aún a aquellos que le pusieron una bomba para matarlo. Así fuimos armando la identidad de este país. Todos sujetos a la Ley que nos aseguraba nuestras libertades. Con disputas ardorosas entre nosotros, pero todos sujetos a la Ley, porque allí estaba el corazón de nuestra libertad. Crearon escuelas, liceos, universidades, trajeron a expertos europeos y americanos, protegieron las actividades industriales, se abrieron al mundo, y tuvieron la osadía de ponerse a la cabeza de las modernidades que en aquel momento estaban todavía en terrenos experimentales en Europa.

Hoy estamos al borde de destruirlo todo, sin seguridad, sin educación, sin respeto a la Ley, asfixiados en un mundo que se abre, despreciando a la Constitución para someterla a las voluntades políticas del momento, instaurando un régimen semi dictatorial para controlar lo que los medios expresan, estamos ante un gobierno artífice de la destrucción de nuestras identidades más queridas.

Los Batllistas de ley, como otros grupos del Partido Colorado, como todos los ciudadanos blancos e independientes de otras colectividades, como todas aquellas personas sin militancia política pero conscientes de su responsabilidad ciudadana, sentimos que no se puede esperar más. Que hay que detener y revertir este ímpetu anárquico y destructivo en que el gobierno ha sumido la vida del país.

Esa es nuestra obligación. El Uruguay espera que cada uno cumpla con su deber.

■



José AMORÍN BATLLE
Abogado. Senador. Fue Ministro de Educación y Cultura

Amenaza a empresarios y desconocer al TCR no habla bien del gobierno

Dos hechos, registrados con pocas horas de diferencia, ponen en cuestión el discurso oficialista sobre el respeto a las instituciones y dejan en evidencia aquello de que «lo político está por encima de los jurídico», principio tan caro a importantes sectores del Frente Amplio. El primero de los casos nos demuestra que este principio no solo es adoptado por los sectores más



radicales del gobierno sino también por los moderados. Al principio de la semana nos enteramos que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, amenazó a los empresarios con quitarles beneficios si continuaban criticando las políticas oficiales. La amenaza tuvo su origen en un documento de nueve puntos presentado por las cámaras empresariales en el que identificaron varios factores (gasto público, tipo de cambio real, inversión pública, regulaciones, relaciones laborales, ciencia, tecnología e innovación, inserción internacional, educación y seguridad), que afectan la competitividad de las empresas y exigen una «profunda reforma» del sector público para revertir esa situación. El documento desató la ira de los ministros de Trabajo, Eduardo Brenta, y de Economía, Lorenzo, dos moderados del gobierno. Una amenaza de ese tipo solo la podíamos imaginar en Argentina, donde el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, es capaz de presentarse en una asamblea de accionistas de Clarín para amenazarlos ante las cámaras de la televisión. En Uruguay no lo creíamos posible. Pero ahora pasó y es grave. Es grave, muy grave, porque nos indica que para el gobierno no se puede, no ya criticar, sino comentar sus políticas, y aún menos hacer aportes. Nada. Sólo es válida la opinión de los voceros del Ejecutivo. El otro caso es, tal vez, más grave aún. Se trata del controvertido Antel Arena, la idea de la presidenta del ente de las telecomunicaciones, Carolina Cosse, para reconstruir el viejo Cilindro Municipal. Por estas horas se conoció un informe del Tribunal de Cuentas que afirma que la construcción del referido campo deportivo es inconstitucional. El TCR advirtió que la construcción viola el artículo 190 de la Constitución, que indica que «los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales». Pues bien, la respuesta de la titular de Antel fue muy clara: igual se hará. Para la funcionaria el fallo del organismo «no es vinculante». Entonces, ¿para qué está el Tribunal de Cuentas? ¿Para qué está si sus conclusiones no son tomadas en cuenta por los organismos del Estado? Claro, que no siempre el gobierno actúa de la misma forma respecto del Tribunal, no hay que ser injustos: para el Ejecutivo y el Frente Amplio el Tribunal de Cuentas es «palabra santa» si avala el subsidio dado al ex ministro Jorge Venegas pero «no vinculante» si declara ilegal el ??Antel Arena. Esto nos demuestra que en opinión del gobierno «lo político está por sobre lo jurídico». Ya es un ?vale todo y no se puede seguir así?. ?Si se siguen desconociendo los informes de los organismos de control y si se continúa amenazando a quienes opinan distinto al gobierno vamos por mal camino. Un camino que no le hace bien a la República.

■

Educación y salud fuera de control

Pablo MIERES
Abogado. Sociólogo. Partido Independiente



La situación ya ha superado todos los límites imaginables. Los conflictos en la educación y en la salud han alcanzado niveles de desborde inadmisibles. Como siempre, la población es la que queda de rehén y paga todos los costos de estos conflictos salvajes, sin freno y con total ausencia de sensatez o sentido común.

Nadie discute que los gremios tienen todo el derecho a reclamar mejoras en sus ingresos, tampoco es discutible que tengan derecho a ejercer las medidas de conflicto que entiendan más pertinentes para el logro de sus objetivos; pero todo tiene el límite de la proporción y la sensatez sobre los daños que estas actitudes generan.

Los gremios de la educación le han infligido un daño profundo al ya maltrecho sistema educativo uruguayo. La absoluta pérdida de continuidad de los cursos ocurrida a raíz de las medidas sindicales va a determinar un daño profundo en la motivación de decenas de miles de niños y adolescentes de nuestro país. Si se buscaba promover la deserción estudiantil, no se debe haber encontrado un instrumento más eficaz.

Es terrible el nivel de desánimo que cunde en miles y miles de jóvenes que pasan semanas sin nada que hacer; sin ir a clases ni hacer otra cosa que esperar en sus casas. Si había una manera de alentar la multiplicación de los «ni-ni», sin dudas que esta postura radicalizada de las conducciones gremiales debe haber sido la más efectiva para producir estos lamentables efectos.

El colmo del descaro es que ahora, además, no están dispuestos a dictar las clases suspendiendo las vacaciones de setiembre. ¡Faltaba más! ¡Perder días de vacaciones! ¡Habrase visto! Por supuesto que la propuesta supone canjear algunos de los días de paro por los días de vacaciones de primavera, de forma de reducir los descuentos correspondientes.

Pero nada vale, hay que hacer colapsar el sistema y afectar directamente a los que tienen menos responsabilidad en todo esto, los estudiantes uruguayos.

Es impresionante el daño que seguramente estas circunstancias han generado en miles de familias cuyos padres organizan horarios y trabajos compatibilizando las horas de clase de sus hijos con sus horarios laborales. Nadie ha sacado la cuenta, ni se ha hecho público; pero el daño social producido a tantas familias debe ser enorme.

La crisis de las familias se agudiza en este desastre en donde seguramente muchos niños y adolescentes quedan a la deriva durante horas, librados a sus propias decisiones, sin responsabilidad de adultos que, como no puede ser de otra manera, deben ir a trabajar ineludiblemente. Esto sin tomar en cuenta a todos aquellos que cuentan con la alimentación de los comedores escolares para sus hijos.



Por otro lado, en materia de salud el descontrol ha llegado a tal límite que finalmente parece que el gobierno está evaluando declarar la esencialidad del servicio. Fue necesario que una joven paciente psiquiátrica se prendiera fuego en el Hospital Vilardebó, ocupado por el sindicato desde hace días, para que se produjera alguna reacción de parte del gobierno.

También en el caso de la salud se trata de un conflicto salvaje, sin límites y totalmente desbordado.

Pero la responsabilidad es también del gobierno, por muchas razones.

La primera y más profunda de ellas refiere a una actitud política que es la que le impide reaccionar con firmeza y energía, porque en su concepción ideológica los actores sindicales son sus aliados políticos e ideológicos. Dejar hacer, actuar con timidez y en forma timorata ha sido la respuesta general de este gobierno ante los desmanes sindicales.

Es más, este gobierno tiene la responsabilidad de haber dado lugares y poderes a los sindicatos mucho más allá del verdadero papel que les corresponde como representantes de un interés particular. Se los ha llevado a roles de cogobierno que no son los apropiados para llevar adelante una política pública. No es casual que estas confrontaciones extremas ocurran justamente en las dos areas en las que el Frente Amplio entregó cuotas de gobierno a los sindicatos.

El gobierno también es responsable por su incapacidad para responder con firmeza y energía, recurriendo al apoyo de las mayorías silenciosas que, no tengan dudas, rechazan, en algunos casos con indignación y en otros con resignación, la gravísima situación generada.

Nos hemos cansado de observar cómo las autoridades gubernamentales han afrontado esta situación con palabras y acciones mínimas, sin respuesta y con enormes dificultades internas para coordinar adecuadamente una estrategia de autoridad ante sindicatos fuera de control.

Este gobierno no ha ejercido la autoridad y ha dejado que la situación se convierta en un auténtico desquicio.

La última perla del collar es aceptar que mientras negocian con el sindicato de docentes, otros activistas sindicales ocuparon la sede del Consejo de Educación Secundaria. ¿Alguien necesita algún dato adicional de la falta de autoridad de la conducción educativa de este gobierno?

Es muy interesante observar la cautela, timidez y ausencia de respuesta ante este conflicto que pega y golpea sobre la ciudadanía, mientras que ante un simple documento de las cámaras empresariales se asume todo el rigor y la energía.

Esa energía y autoridad que tanto falta para defender a los ciudadanos de este país en su inalienable derecho a la salud y la educación.

Justamente, este es el tema de fondo. Tanto que se habla de los derechos humanos, lo que está detrás de estos conflictos es la violación más flagrante al derecho de las grandes mayorías ciudadanas a la educación y la salud. Particularmente el derecho a la salud y la educación de aquellos sectores de la sociedad más débiles, de menor nivel socio-económico y con mayores vulnerabilidades para el desarrollo de su vida adulta. Los que tienen mayores recursos, los más aventajados social y económicamente compensan o ni siquiera se enteran de lo que pasa en los hogares de las grandes mayorías populares.

¿Eso es un gobierno de izquierda?

■



Washington ABDALA
Abogado. ex Diputado. Periodista. Docente Universitario.

Los malditos ascensores donde pasa la vida...

Sufro en los ascensores. Me pudre hablar con las personas de tremendas boludeces allí. La gente, además, se siente compelida -por alguna maldita razón- a entablar un diálogo supuestamente simpático en esos cubículos.
Las viejitas vecinas siempre están con el tema del frío, de la temperatura, se van muriendo, mueren, pero antes de morir, dale con el frío y con Cisneros o con Torraca. Yo les espeto la típica: «hoy estuvo fresquito¨. Y con eso porque es el perro de la vecinita, y a la vez, tenés que salir airoso de semejante loquero sin perder la compostura. Mientras tanto el perro te mira y uno no sabe si surtirlo o si proferirle alguna ordinariez.
Yo creo que hay perros degenerados que algo tienen conmigo. Es un tema que me ha traumado desde siempre.
Los peores son los porteros. Vos te venís meando a tu casa casi desesperado y el tipo suele detenerte y acompañarte dentro del ascensor



arrancan duro y parejo y siguen rumiando enojos sobre la humedad y los huesos. Pongo cara de comprensión cínica y miro lo que falta para depositarla en su piso con ansiedad. Cuento los instantes desesperado para no sentir esa tortura de todos los días, el mismo canto, la misma queja, el mismo run run. Odio los ascensores.
Odio los que te dan charla en el ascensor para hablar de cosas que no te importan, gente que hace dieta y te la cuenta, o que corren y te relatan sus promedios de pulsaciones por minuto, o gente que te habla del maldito trabajo en el que están...Nada me interesa demasiado adentro de un ascensor (y afuera algunas cosas, otras muy poco), solo me quiero ir de esa caja podrida cuanto antes. No es lugar para socializar, pero los seres humanos son obscenos a toda hora.
Las vecinitas que vienen con el perro jadeando son otro tema. Los perros en los ascensores son impúdicos. Por razones que no entiendo, suelen oler las partes pudendas con proverbial entusiasmo, parece que allí huele rico...que se yo. Uno, que sale todo limpio y bañadito, tiene que soportar esa situación rara donde un animal se te mete entre las piernas, te mete el hocico por debajo de la bragueta, anda buceando por allí con entusiasmo de chica Play Boy y no lo podés trompear para hablarte del arreglo de un caño, o de la puerta tal que hay que cambiar porque está vencida, o te da la lata hablando de un portero amigo que quiere laburar con él...vos solo pensás en mear alocadamente, desesperadamente, deliciosamente cuanto antes y tu mente no puede procesar todas las narraciones del portero acompañante…solo vas asintiendo, produciendo sonidos onomatopéyicos estilo Messi y poco más. Que termine este desgraciado que cuando llegue a mi piso saldré gritando que me abran la puerta de mi casa ya, ya, ya.
No hay peor cosa que encontrarse con un minún en un ascensor. Esos minunes que estuviste relojeando siempre y que nunca se te dió un encuentro casual. Sabés que es un partido de segundos, y no es fácil ese momento. Sabés que le tenés que decir algo simpático y bajarte donde ella se baja para rematar la venta en esos segundos malditos. Sabés que le tenés que entrar con un chichoneo gracioso porque las mujeres en esa ventana tienen las defensas bajas. Y cuando te disponés a abrir la boca: te mira con desdén y se baja. Fufffff.
Los ascensores tendrían que decir: está prohibido hablar acá adentro por razones de salud mental. Todo sería mucho mejor.

■



Marcelo GIOSCIA CIVITATE
Abogado. Periodista

Costosa colaboración

Quienes han impulsado los criterios de colaborar con investigaciones o procesos que se tramitan o realizan fuera de nuestras fronteras,



(concretamente en el caso que nos ocupa, en la República Argentina) apelando a convenios de cooperación y tratados internacionales, no parece hayan siquiera evaluado, cuán costosas pueden resultar tales decisiones para los intereses financieros y la imagen de nuestro país. Imagen que ha costado muchos años construirla, de la mano del fortalecimiento institucional y de la plena vigencia de principios de derecho que han distinguido a nuestra plaza como segura y confiable.
Es que echar por tierra la tradición de no brindar información y la de reservar datos de personas o empresas (denominado «secreto bancario» salvo las excepciones legalmente previstas) que realizan negocios e inversiones en nuestro país, necesariamente tendría consecuencias.
Pues ha tomado estado público un hecho -conocido ya por autoridades del gobierno- vinculado a la decisión de abandonar nuestra plaza financiera una institución extranjera, la misma cuyas oficinas fueran allanadas por la Justicia Especializada en Crimen Organizado -en un procedimiento cuestionado, en el que se confiscaron computadoras y hasta los teléfonos móviles- respondiendo positivamente a una solicitud de un juez argentino, y en el que se le retiró información de la totalidad de sus clientes.
Formalmente, esta institución, ha sostenido que su decisión se debe a un replanteo estratégico de su negocio en América Latina, sin embargo, la señal no debiera pasar desapercibida, como seguramente no lo fue entre las autoridades vinculadas al sector.
Algunos expertos sostienen que no es una buena señal y que esta circunstancia, golpea nada menos que la confianza en el sistema. Confianza que, es bueno recordar, se fuera construyendo paso a paso, y que entre otros valores inmateriales, permitiera al Uruguay salir de la peor crisis financiera a comienzos del presente siglo y recibir luego, importantes flujos de capital hacia nuestro suelo.
En el afán por cooperar, la juez actuante, inicialmente, hasta había autorizado que participaran en el procedimiento peritos argentinos, lo que felizmente fue luego revocado, limitando el acceso y manejo de la información obtenida a peritos uruguayos. De no haberlo hecho, las consecuencias hubieran resultado por demás graves. Obsérvese que, se hubiera desconocido, entre otros, el principio de no proporcionar datos tributarios en forma retroactiva, lo que hubiera habilitado a su par argentino a iniciar innumerables acciones judiciales, sin que la Dirección General Impositiva hubiera intervenido en el asunto.
Frente a estos hechos, que de alguna manera violentan el principio de seguridad jurídica, se formula la inquietud de establecer un protocolo de procedimiento administrativo y judicial a ceñirse, en casos como el analizado el que habría de establecerse por Ley, con las debidas garantías para los derechos de todos los involucrados. No se trata aquí de la existencia de «zonas liberadas» como se adujo por parte del gobierno.
Se trata de hacer cumplir los tratados y acuerdos internacionales, aplicando armónicamente el ordenamiento jurídico que nos rige, respetando los procedimientos que garantizan el pleno goce de los derechos de cada quien, sin pretender avasallar los de nadie, ni mucho menos, generar temores en un área tan sensible.

■

El tercer nivel de gobierno en Montevideo

UNA LEYENDA URBANA

Miguel Manzi
Abogado, ex diputado, Partido Colorado
miguelmanzi@gmail.com http://miguelmanzi.com



El otro día un amigo me dijo una de esas cosas horribles que solo te dicen los amigos. Hablando de la mala calidad del debate público en general y político en particular, de la habitual descalificación personal, de la repetición eslogánica de lugares comunes, de la falta de razones y argumentos, de la superficialidad con que se abordan temas relevantes, me espetó una frase lapidaria: «En las discusiones, Uds. pierden por walkover» (por abandono, por retirada). Y siguió: «Como del otro lado dicen disparates, Uds. no se dignan contestar, al menos no con la contundencia y energía que hace falta; no se sabe si por respetuosos, por arrogantes o por cobardes». A la pucha. Creo que mi amigo no tiene toda la razón, pero tiene parte. A veces yo también siento que damos la espalda; otras veces sencillamente no tenemos con qué (pasa cuando sos minoría…). Como fuera, a fuerza de repetición poco o mal contestada, se van instalando en la sociedad ideas y paradigmas que se dan por buenos, se consagran como verdades inconmovibles, y su puesta en cuestión se hace cada vez más difícil o inútil (desgracia que se ve favorecida por el partido hegemónico, pero antes que eso, por la cultura hegemónica). Tal lo que ocurre con la descentralización, el tercer nivel de gobierno, los municipios, los CCZs y los varios concejos, el completo de la casa de la participación. El tema cobra ocasional actualidad, porque en octubre se votan concejos vecinales en Montevideo.

UN PRESENTE GRIEGO

En Occidente, la construcción y el concepto de ciudadanía es un invento griego (como casi todo lo demás). Hay, por tanto, 2.500 años de elaboración teórica y ensayos prácticos a su respecto, con los vaivenes que imponen las modas. Si hubiera que poner «etiquetas» para una «entrada» en internet, cabría anotar «libertad», «democracia», «representación», «república», «gobierno», «participación», «legitimidad», «control», «poder», «equilibrio de poderes», «instituciones», «política», «igualdad», «equidad», «derechos», «autodeterminación», cien más; y en la bibliografía otro tanto, desde Aristóteles, pasando por Rousseau y Tocqueville, hasta Habermas, Dahl, y todos los contemporáneos que yo desconozco por unanimidad. En las últimas décadas, ha cobrado especial protagonismo el subconjunto «participación-descentralización-gobiernos locales», que concita pareja adhesión entre los organismos internacionales, el progresismo político y la academia vernácula, tornando políticamente incorrectísimo cualquier cuestionamiento o sospecha acerca de su pertinencia y eficacia para cumplir sus objetivos proclamados, básicamente: construcción democrática y eficiencia en la asignación de recursos. El moderno empuje consagratorio se lo dio la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, al proclamar el «principio de subsidiariedad», según el cual los asuntos públicos deben ser resueltos por la autoridad más próxima al problema; y en ausencia de tal autoridad… hay que crearla. Con esta inspiración, y revoleando el poncho frente al desconcierto de los partidos tradicionales, el F.A. implantó en Montevideo los CCZ y los concejos vecinales en 1990 y a escala nacional, veinte años después, los municipios, con sus alcaldes y concejos municipales. La investigación y la producción académica local respecto a este proceso es incipiente; el elenco de especialistas es reducido y la aproximación al tema se hace (como es natural) desde la más o menos confesa adhesión a sus postulados (la sociedad «*más tarde o más temprano reconocerá este nuevo espacio de expresión y participación política*», dicen los coordinadores de un estudio de 2010; «*En nuestra concepción de una sociedad democrática, la descentralización y la autoadministración municipal son elementos fundamentales para garantizar un buen gobierno en servicio a la comunidad y para mejorar las condiciones de vida de las personas*», dice el financiador de un estudio de 2011).

LA GENTE NO ESTUDIÓ CIENCIA POLÍTICA

Pero como vecinos montevideanos, estamos sometidos a una onerosa acción de propaganda financiada por la Intendencia, que intenta persuadir de que «*Desde el arreglo de una pequeña calle a las grandes propuestas para la ciudad, desde actividades para el adulto mayor o el festival de rock; grandes y pequeñas cosas, todas indispensables para vivir mejor, pasan por la atención de los Consejos Vecinales*». Mentira. Así dicho, mentira de principio a fin, eslogan, ideología. Será por eso, al menos en parte, que la gente no se prende, como queda en evidencia en los siguientes cuadros:

Relación entre habilitados para votar la integración de los CV / presupuesto participativo y los votantes efectivos 1993-2011.

FUENTE: papel de trabajo «Análisis de los Concejos Vecinales de Montevideo», Ferla et al. El asunto no es banal desde ningún punto de vista. Volviendo a la teleología del discurso participativo-descentralizador: **por el lado de los recursos**, carecemos en absoluto de evidencia que permita afirmar la mejor asignación del 12% de su presupuesto que la Intendencia de Montevideo destina directamente al «tercer nivel de gobierno» (más de US$ 60 millones por año). Y **por el lado de la construcción democrática**, si no bastaran los cuadritos de arriba («vox populi, vox dei»), la asunción acrítica de los mecanismos participativos-descentralizadores (cuando dejamos de preguntarnos si es por ahí la cosa), el argumento de que hay que profundizarlos para que den sus frutos (qué chucho, eso decían del «socialismo real»), o el otro de que van apenas veinte años de experiencia (¿cuántos serán suficientes?), alimentan (queriéndolo o no) versiones devaluadas de la libertad individual (o de la libertad a secas), confundiendo al buen vecino con el buen militante (elocuente expresión que le leí a Lucio Cáceres). Tales distracciones se asocian con el debate, asordinado por la corrección política, entre democracia participativa y democracia representativa. A este respecto, no resisto la tentación de editar un párrafo de un trabajo inédito de un amigo, que me siento autorizado a plagiar pero no a citar: *Los procesos políticos de tipo representativo ponen un bajo precio de entrada para existir políticamente. Alcanza con votar cada cierto tiempo para ser tenido en cuenta en los cálculos de los actores políticos. Llegado el momento de las elecciones, cada voto cuenta. En cambio, los procesos políticos de tipo participativo elevan el precio de entrada: si uno no está dispuesto a trasladarse, invertir tiempo y participar, deja de existir políticamente. Llegado el caso extremo, un énfasis demasiado grande en la participación podría conducir a la exclusión política más o menos permanente de quienes no tienen la disposición, el tiempo, la energía, las condiciones culturales o los recursos psicológicos requeridos para involucrarse en la acción pública. Participar en la vida política puede ser importante, pero más importante es que aquellos que no quieran participar sigan existiendo políticamente.*

	1993	1995	1998	2001	2004	2006*	2007**	2008*	2011*
Habilitados para votar	988755	988755	988755	988755	990610	990610	1030594	1030594	1030594
Votantes efectivos	68558	82496	106909	100552	76643	71372	74727	74123	72473
% votantes /habilitados	6,9%	8,3%	10,8%	10,2%	7,7%	7,2%	7,3%	7,2%	7,0%

(*) Votación simultánea de concejales vecinales y propuestas de presupuesto participativo.
(**) Votación de propuestas de presupuesto participativo.

Cantidad de personas interesadas en postularse y concejales electos 1993-2011.

FUENTE: ídem que el anterior.

	1993	1995	1998	2001	2004	2006*	2008*	2011*
Postulantes al Concejo	1779	1901	1962	2123	2054	1376	1032	972
Concejales Electos	629	598	623	639	625	627	621	557
Habilitados para votar	988755	988755	988755	988755	990610	990610	1030594	1030594
% Habil.vot./ Postulantes	0,17%	0,19%	0,19%	0,21%	0,20%	0,13%	0,10%	0,09%

¿Y ENTONCES, QUÉ HACEMOS?

Pensamos, discutimos, investigamos, buscamos evidencia dura, revisamos. El debate no está agotado ni muchísimo menos. Y si alguna voz falta en el escenario, es precisamente la de los ciudadanos. Sociólogos, politólogos y políticos son los protagonistas de seminarios y publicaciones; de los vecinos apenas sabemos que «se expresan con los pies»: no van a votar al tercer nivel. Algunas precisiones elementales para terminar. **PRIMERO:** no se puede pensar y hacer lo mismo para Montevideo que para el interior; es de evidencia apodíctica que el municipio de Fraile Muerto tiene pleno sentido para los 3.168 habitantes de su circunscripción, tanto como es obligatorio dudar que el municipio B pueda siquiera concebir las demandas de las 600.000 personas que circulan diariamente por su territorio. **SEGUNDO:** basta asomarse un día a la Intendencia de Montevideo (ahora se complica, porque instalaron una feria en el atrio; da vergüenza ajena) para apoyar cualquier iniciativa desconcentradora; ¡instalemos más oficinas municipales en los barrios!, ¡más trámites por internet!, ¡más servicios por celular! **TERCERO:** los dibujitos que hicieron en Montevideo no están tallados en piedra: son decretos y resoluciones municipales, que se cambian por otros decretos y resoluciones municipales; sólo hay que ganar la Intendencia… ¡Vamo'arriba la coalición!